

SEMANARIO CUATRO F

VENEZUELA, DEL 20 AL 27 DE OCTUBRE DE 2026 • AÑO 11 N° 488

¡GANÓ EL PUEBLO VENEZOLANO!

Consulta Popular 2026: la madurez de un mecanismo que da la palabra al pueblo
Por Johanna Carvajal.

P.2-4

Venezuela presenta ante la FAO el "Plan Venezuela Alimenta" como Modelo de Resistencia Victoriosa
Por Giselle Ventura.

P.5-7

Falsedades y simplificaciones en el tema del odio político
Por Clodovaldo Hernández

P.7-9

Periódico del



Consulta Popular 2026: la madurez de un mecanismo que da la palabra al pueblo



Por Johanna Carvajal.

La Consulta Popular Nacional de 2026 no es un hecho aislado ni una improvisación. Es la culminación de un proceso que comenzó a gestarse desde las bases y que, tras ocho ediciones, se ha consolidado como una herramienta real de decisión comunitaria. Lejos de los formalismos de la democracia representativa tradicional, este mecanismo ha demostrado que la participación protagónica no es una consigna, sino una

práctica que transforma territorios y fortalece el tejido social.

UNA HISTORIA QUE NACE DESDE ABAJO

Para entender el alcance de la consulta de 2026, es necesario remontarse a sus orígenes. Este método participativo no surgió de un escritorio gubernamental, sino del Congreso Nacional de Comunas de diciembre de 2019 en el estado Miranda. Fue allí donde se sembró la semilla que luego, en 2024, el

Ejecutivo nacional extendió a todo el país. Desde entonces, el mecanismo ha evolucionado: primero con una frecuencia anual, luego semestral y, finalmente, en 2025, adquirió un ritmo trimestral que permite una respuesta mucho más ágil a las necesidades cambiantes de las comunidades.

La jornada de este 18 de octubre de 2026 marca un hito particular. No solo se trata de la octava consulta nacional en la historia reciente, sino de la primera

en la que el mecanismo se expande más allá de las comunas tradicionales para incorporar a 120.000 juntas de condominio en todo el país, las cuales votaron por 428 proyectos propios orientados a resolver problemas de infraestructura vertical, como ascensores, bombas de agua e impermeabilización. Esta apertura responde a una realidad innegable: la participación ciudadana no puede encasillarse en una sola forma de organización territorial.

IMPACTO TANGIBLE EN LA VIDA COMUNITARIA

El valor de una consulta popular no se mide por la retórica de sus discursos, sino por la concreción de sus resultados. En 2026, el impacto ha sido verificable. El ministro de las Comunas, Ángel Prado, destacó un dato revelador: mientras que al inicio de estas consultas el 50% de los proyectos estaban relacionados con el agua, actualmente esa cifra ha descendido al 13%. Esto no significa que el problema del agua se haya resuelto por completo, sino que la atención sostenida a las necesidades más urgentes ha permiti-

do que las comunidades comiencen a priorizar otras áreas, como la rehabilitación de escuelas, el tendido eléctrico y el financiamiento de emprendimientos locales.

La efectividad del método es, quizás, su mejor propaganda. Prado señaló que en esta edición se sumaron vecinos que normalmente no participaban en estos procesos, precisamente porque han visto cómo los recursos llegan y los problemas se resuelven. En la Comuna Arañero de Sabaneta, en Caracas, la más votada durante la primera consulta de 2026, los habitantes priorizaron un proyecto de gas directo que ya cuenta con recursos aprobados y que beneficiará a todos los edificios del urbanismo. Ese es el tipo de resultado que convierte la

participación en una experiencia concreta y no en un ejercicio abstracto.

PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA: EL PUEBLO COMO SUJETO DE DECISIÓN

El término "protagónica" corre el riesgo de vaciarse cuando se usa sin contexto. Sin embargo, en la Consulta Popular de 2026, adquiere un significado operativo. No se trata solo de votar, sino de decidir el destino de los recursos a través de un proceso que comienza en asambleas comunitarias. Son los consejos comunales y las comunas los que debaten, priorizan y seleccionan los proyectos que luego se someten a votación. Y una vez elegidos, son las propias comunidades las que supervisan la ejecución y



exigen rendición de cuentas.

La ampliación del derecho al voto a partir de los 15 años es otro elemento que merece atención. En un país donde la juventud suele ser vista como objeto de políticas públicas y no como sujeto de decisión, permitir que los adolescentes participen en la definición de las obras de su entorno inmediato tiene un valor formativo incalculable. En la Comuna Arañero de Sabaneta, se reportó la asistencia de 600 jóvenes que acudieron a las urnas para elegir proyectos vinculados a la segunda transformación del Plan de la Patria.

UNA DEMOCRACIA QUE SE EJERCE EN EL TERRITORIO

La Consulta Popular de 2026 también ha demostrado ser un mecanismo de adaptación y resiliencia. La jornada originalmente estaba prevista para julio, pero fue pospuesta debido al doble sismo del 24 de junio. Lejos de suspenderse, la consulta se reprogramó y se orientó a priorizar la atención en las zonas afectadas. Esa capacidad de respuesta ante la contingencia habla de un mecanismo lo suficientemente flexible



como para ajustarse a las circunstancias sin perder su esencia.

Las cifras de participación respaldan la legitimidad del proceso. La primera consulta de 2026, celebrada en marzo, rompió récords de asistencia, superando en más del 10% la participación de la consulta de noviembre de 2025. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó esa jornada como una "participación histórica" que demostró la fortaleza organizativa del pueblo. Y la consulta de octubre, con la incorporación de las juntas de condominio, apunta a consolidar esa tendencia.

La Consulta Popular Nacional de 2026 no es perfecta, y probablemente sus propios impulsores lo saben. Pero sería un

error analizarla con los lentes de la democracia liberal tradicional, que reduce la participación al acto de depositar un voto cada ciertos años. Lo que está ocurriendo en Venezuela es un experimento distinto: una democracia que se ejerce en el territorio, que discute en asambleas, que prioriza con criterios colectivos y que luego exige cuentas. Es un mecanismo que, tras ocho ediciones, ha aprendido a corregir el rumbo, a ampliar su base de participación y a demostrar que la gente común, organizada, puede tomar decisiones sobre los recursos que le pertenecen. En un continente donde la desafección política es moneda corriente, esa experiencia merece, como mínimo, ser mirada con atención.

Venezuela presenta ante la FAO el "Plan Venezuela Alimenta" como Modelo de Resistencia Victoriosa



Por Giselle Ventura.

En el escenario del Foro Mundial de la Alimentación 2026, celebrado en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, la participación de la presidenta Delcy Rodríguez marcó un hito histórico de reafirmación soberana y proyección internacional. Lejos de las narrativas hegemónicas que intentan invisibilizar el esfuerzo colectivo de la nación, la delegación venezolana presentó ante el plenario global un modelo de re-

sistencia activa, creatividad productiva y reivindicación social frente a los embates de las medidas coercitivas unilaterales.

La Voz del Sur Global frente a la Crisis Alimentaria Global

La intervención de la Presidenta se produjo en un escenario internacional caracterizado por profundas vulnerabilidades estructurales en las cadenas de suministro mundiales, estragos del cambio climático en la agricultura y tensiones geopolíticas que afectan el comercio

internacional de cereales e insumos.

En este contexto de crisis sistémica, Venezuela se plantó en la FAO para demostrar que la respuesta ante las adversidades impuestas por el bloqueo económico ha sido la consolidación de un modelo de soberanía alimentaria activa. Lejos de ceder ante las presiones, el Estado venezolano ha impulsado una reingeniería profunda de su economía interna, priorizando la producción local, la ciencia aplicada y el fortalecimiento de los encadenamientos pro-

ductivos comunales.

El "Plan Venezuela Alimenta": Apuesta Hacia 2030 y el Blindaje Agro-productivo

El anuncio estelar ante la plenaria internacional fue la presentación oficial del Plan Venezuela Alimenta, una estrategia macro y microeconómica diseñada para acelerar y blindar el cumplimiento de la meta de Hambre Cero de cara al año 2030.

Este plan articula de manera virtuosa los siguientes elementos:

- Sustitución de insumos y soberanía en semillas: Se destacó el esfuerzo nacional en la producción, mejoramiento y adaptación de semillas autóctonas a los diversos pisos térmicos del

territorio nacional, reduciendo drásticamente la dependencia de transnacionales semilleras.

- Agricultura regenerativa y ecológica: El plan incorpora directrices científicas para el uso racional del agua, la recuperación de suelos afectados por la erosión y la adopción de prácticas agroecológicas que resguarden la biodiversidad nacional.
- Articulación industrial y comunal: El Plan Venezuela Alimenta enlaza el esfuerzo de los pequeños y medianos productores con la industria procesadora nacional y los circuitos económicos comunales, garantizando canales de distribución eficientes y directos del campo a la mesa.

El Poder Legislativo y el Estado Comunal como Ejes de Transformación

Como parte de la articulación entre las políticas públicas internacionales y la realidad legislativa interna, se adelantó la presentación ante el Parlamento nacional de un instrumento jurídico de vanguardia: la Ley para la Economía Local.

Esta ley tiene como propósito fundamental otorgar un marco legal sólido al músculo productivo de las bases, integrando el emprendimiento comunal y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) con la gran agroindustria nacional. De este modo, el Estado Comunal se consolida como epicentro del nuevo modelo económico no rentista, donde el poder de decisión y la gestión



de la riqueza descansan directamente en manos del pueblo organizado.

Protección Social y Justicia Distributiva: El Sostén del Ser Humano

La exposición en la FAO no se limitó a cifras de rendimiento agrícola o macroeconomía; colocó en el centro absoluto de la política al ser humano. En este sentido, se ratificó la sostenibilidad y el alcance de las políticas de protección social impulsadas por el Gobierno Bolivariano:

- El Programa de Alimentación Escolar (PAE): Presentado como un escudo protector insustituible que garantiza la seguridad nutricional de millones de niños, niñas y jóvenes en edad escolar a lo largo y ancho del territorio nacional, blindando el futuro de la Patria frente a las fluctuaciones económicas.
- El protagonismo de la mujer rural y campesina: Se rindió un merecido reconocimiento al rol histórico y vanguardista de la mujer agricultora, comunera y protectora de la biodiversidad, quien lidera una gran parte de los comités de



producción local y circuitos económicos en las regiones.

Diplomacia Bolivariana de Paz y Alianzas Estratégicas

La agenda desarrollada por la delegación venezolana en Italia incluyó una intensa actividad de diplomacia bilateral. Destacó de manera especial el encuentro sostenido con el presidente de la República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, reafirmando los lazos de hermandad y cooperación Sur-Sur.

Estas acciones demuestran que la Diplomacia Bolivariana de Paz rinde frutos concretos: la estabilidad política interna, la convivencia democrática y el diálogo nacional han creado el clima de seguridad jurídica y confianza propicio para que la inversión internacional res-

ponsable, la transferencia tecnológica y la cooperación solidaria se pongan al servicio del desarrollo integral de los pueblos.

La participación de la delegación venezolana en el Foro Mundial de la Alimentación de la FAO dejó una lectura clara y contundente ante la comunidad internacional: la soberanía alimentaria en Venezuela no es una consigna abstracta, sino una conquista cotidiana forjada con el trabajo incansable del campesino, la organización indestructible del Poder Popular y la voluntad política inquebrantable de un Estado que coloca la justicia social y el bienestar del pueblo en la cúspide de sus prioridades. Venezuela se consolidó así, ante los ojos del mundo, como un faro de dignidad, resistencia victoriosa y esperanza hacia el futuro.

Cuatro Temas

Falsedades y simplificaciones en el tema del odio político

Apuntes para no caer en las narrativas interesadas de los promotores de la violencia



Por Clodovaldo Hernández.

Con la iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de reformar la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia se han reavivado las narrativas mentirosas y las

visiones distorsionadas sobre un fenómeno social inducido adrede por factores interesados en perturbar la paz del país.

La manipulación tuvo y tiene un ariete semántico: desde la promulgación de este instrumento jurídico, por

la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, ha sido denominada por sus adversarios como “Ley del Odio”, dándole de esa forma un sentido totalmente opuesto al que animó a sus promotores. En lugar de combatir el odio, esa denominación da a entender que lo valida.

Infortunadamente, ese nombre ha tendido a imponerse, lo que ha contribuido a que muchos dirigentes y comunicadores revolucionarios lo usen y con ello contribuyan a una matriz de opinión negativa.

EL BORRADO DEL CONTEXTO HISTÓRICO

La gran mentira sobre esta normativa, difundida intensamente cuando fue aprobada y entró en vigencia —y repotenciada ahora con su reforma—, es la que señala que se trató de una iniciativa arbitraria y no motivada del chavismo contra pacíficos opositores.

Este relato falso se cimentó, en los primeros años de la vigencia de la ley, en las narrativas mediáticas y de redes, según las cuales las manifestaciones desarrolladas por sectores opositores eran pacíficas y ajustadas a la legislación. Eso, a todas luces, es falso. Las protestas que fueron

recurrentes en la década pasada y que alcanzaron su tope en cuatro meses de disturbios callejeros muy cruentos en 2017, generaron la necesidad de mecanismos de contención que evitaran la anarquía y la guerra civil.

Baste recordar que durante ese período se repitió y aumentó exponencialmente lo ocurrido en 2014, cuando se adoptó la modalidad de agresiones armadas contra instituciones y bienes públicos, el linchamiento de funcionarios y hasta de personas consideradas chavistas por su aspecto o vestimenta.

De ese tiempo datan acciones tan desprovistas de cualquier ápice de respeto humano, como los llamados escraches en lugares públicos o cacerolazos frente a las residencias de personas señaladas como partidarias del gobierno. También surgió entonces uno de los “grandes inventos” de la oposición radical en lo que va de siglo: las

bombas puputov.

EL MITO DE LA ESPONTANEIDAD

Desde un principio se ha pretendido establecer la creencia de que la rabia desbocada de personas comunes y corrientes en momentos específicos (guarimbas, calenteras y comanditos, por ejemplo) fueron manifestaciones espontáneas, soslayando de esa manera el papel que han tenido los partidos y líderes de la ultraderecha, los medios de comunicación y los influencers y creadores de contenido en redes en la fabricación de ese estado alterado colectivo.

Este es un componente fundamental de la estrategia de los dirigentes partidistas y comunicacionales de ese sector opositor para lavarse la cara y desentenderse de la autoría intelectual de acontecimientos muy violentos y continuados.

Al vender el relato amañado de la espontaneidad de las protestas,

procuran también reforzar las matrices según las cuales la mayoría del pueblo venezolano ha estado siempre en contra de los gobiernos revolucionarios. Esa es una pieza fundamental de su narrativa y por ello insisten tanto en remarcarla.

La realidad es que buena parte de los participantes en las protestas violentas de los años 2014, 2017, 2019 y 2024 fueron jóvenes manipulados mediante las poderosas matrices de opinión implantadas durante años o sujetos del mundo delincuencial captados mediante pagos en dólares e, incluso, a través del suministro de drogas, como se evidenció en su momento.

¿Y QUÉ HACER

CON EL ODIO INTRAOPOSITOR?

Entre las muchas simplificaciones que afloran en el debate político, hay otra sobre la que vale la pena reflexionar: Se pretende hacer creer que las expresiones de odio se observan exclusivamente de los chavistas hacia los antichavistas y viceversa. Pero una revisión objetiva de lo ocurrido en los últimos años en el escenario opositor demuestra que eso no es exacto porque ha germinado y florecido una tóxica animadversión interna entre quienes se oponen al gobierno bolivariano.

¿De qué otro modo se pueden calificar las continuas descalificaciones que han sufrido

do quienes se negaron a asumir las políticas suicidas de no participación electoral en los años posteriores a 2015? ¿Es que acaso el uso de epítetos como alacrán y colaboracionista, en un escenario opositor altamente radicalizado, no es un llamado abierto a que los dirigentes moderados sean víctimas de ataques mediáticos, de redes y, en una situación de escalada, de agresiones físicas?

El odio es, pues, una trama compleja. Las matrices del oposicionismo radical pretenden torcer la verdad histórica y la realidad actual para adaptarla a su relato, librarse de responsabilidades y presentarse como víctimas. Nada nuevo bajo el sol.



Presidente del Psuv:
Nicolás Maduro Moros

**Secretario General
del Psuv:**
Diosdado Cabello

**Secretario de
Comunicación:**
Jorge Rodríguez



Director General: Gustavo Villapol.

Jefa de Redacción: Johanna Carvajal. **Diseño y Diagramación:** Eugenio Rada

Equipo de Trabajo: Iván Mc Gregor, José Salazar, Mariana Rodríguez, Anaís Churió, Judith Casianis, Marianny Pereira, Gherio, Manuel Atencio, Antonio Rodero, Gabriel García, Adriel Martínez y Gisell Viloria. **Corresponsal en Europa:** Geraldina Colotti.

Depósito Legal: pp201401DC1761



@CuatroFWeb



@CuatroF Web



Cuatro F Web



Cuatro F Web

Hablar desde lo profundo más allá de la presencia



Por Carolys Helena Pérez González.

Qué fácil resulta decir que no es suficiente, cuando hablas desde el privilegio de la ceguera! Pues la presencia de una mujer en un espacio de poder siempre será insuficiente si no somos capaces de mirar todo lo que esa presencia representa, cuestiona y transforma.

La participación de Delcy Rodríguez en la Asamblea General de las Naciones Unidas o en la FAO abre una conversación que va más allá del lugar que ocupa una mujer en una fotografía o del escenario desde donde pronuncia un discurso. Nos invita a reflexionar sobre una pregunta que el feminismo ha colocado históricamente en el centro del debate: ¿quiénes

han tenido el derecho de hablar, de ser escuchadas y de construir los relatos que explican nuestras sociedades?

Durante siglos, las mujeres fuimos ubicadas en los márgenes de la vida pública. Se nos permitió acompañar procesos, sostener comunidades, construir afectos y hacer posible la vida cotidiana, pero muchas veces se

nos negó la posibilidad de participar en los espacios donde se toman decisiones y se define el rumbo colectivo.

Por eso, cuando una mujer ocupa una tribuna política, no estamos hablando únicamente de una conquista individual. Estamos hablando de una disputa histórica por el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos, como creadoras de pensamiento y como protagonistas de la transformación social.

Sin embargo, el feminismo también nos ha enseñado que no existe una única experiencia de ser mujer. Las desigualdades atraviesan nuestros cuerpos de maneras distintas. No es igual la historia de una mujer que ha tenido acceso a determinados privilegios que la de una mujer afrodescendiente, una mujer popular, una trabajadora, una madre que sostiene un hogar o una mujer que ha tenido que abrirse camino en espacios donde su voz ha sido cuestionada antes de ser escuchada.

Por eso la representación

no puede quedarse en la presencia. La pregunta más profunda es qué hacemos con los espacios conquistados y a quiénes permitimos llegar después. Una mujer que ocupa un lugar de decisión también tiene la responsabilidad histórica de ampliar las posibilidades para otras mujeres. Porque el poder, cuando se mira desde una perspectiva feminista, no puede entenderse solamente como la capacidad de llegar a un espacio, sino como la posibilidad de transformar las condiciones para que otras personas puedan participar plenamente.

En ese sentido, la comunicación y la educación son territorios fundamentales. Los pueblos no solamente se disputan desde las instituciones; también se disputan desde las ideas, desde los relatos y desde la manera en que interpretamos nuestra propia historia.

Las mujeres hemos luchado durante generaciones no solamente por entrar a los espacios donde se toman decisiones, sino por transformar

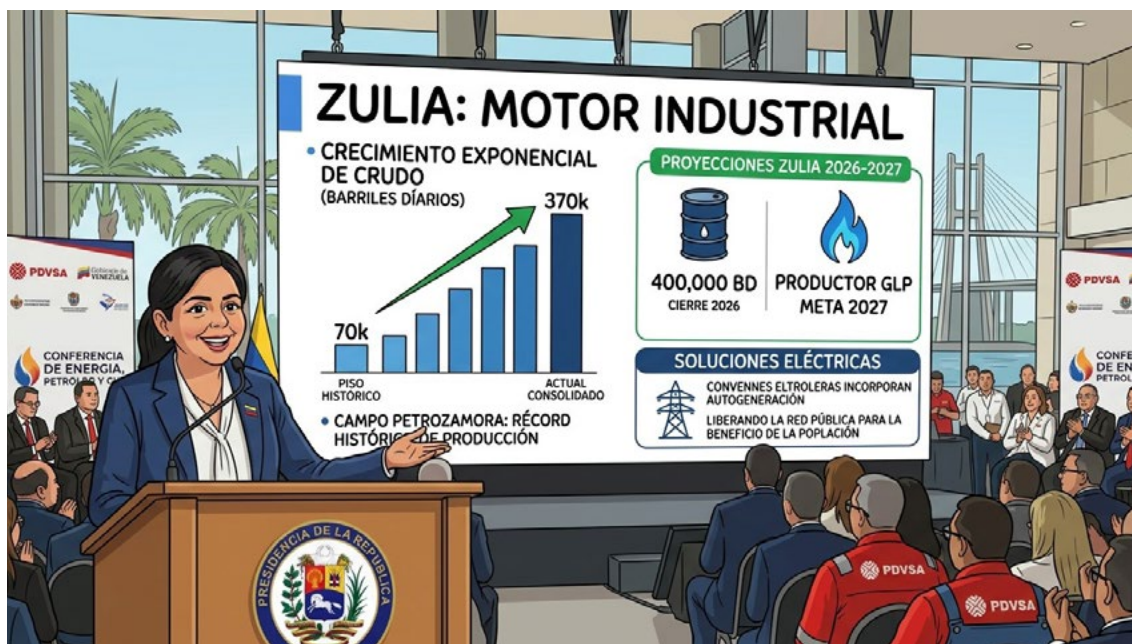
las lógicas que durante mucho tiempo definieron quién podía hablar, quién era escuchado y quién tenía autoridad para nombrar la realidad.

Por eso, cada presencia femenina en un espacio de poder debería abrir una conversación más amplia. No basta con preguntarnos cuántas mujeres están allí; también debemos preguntarnos qué voces siguen ausentes, qué desigualdades permanecen intactas y qué estamos haciendo para que las próximas generaciones no tengan que pedir permiso para ocupar los lugares que les corresponden.

La pregunta que queda abierta no es únicamente si las mujeres hemos llegado a las tribunas históricamente negadas; La pregunta más profunda es qué hacemos con esas tribunas cuando llegamos: si las utilizamos para reproducir viejas formas de poder o para construir nuevas maneras de participar, escuchar y transformar.

¡Aquí no se rinde nadie, palabra de mujer!

Zulia dinamiza su aparato energético



Por Daniela Rodríguez.

En el marco de las políticas de reactivación económica, soberanía energética y diversificación industrial impulsadas por el Ejecutivo Nacional; la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, ofreció un balance sobre el desempeño de la industria en el estado Zulia, durante su intervención en el cierre de la Conferencia de Energía, Petróleo y Gas 2026.

La jefa de Estado informó que los niveles de extracción de crudo en la región occidental han experimentado un cre-

cimiento exponencial y sin precedentes, pasando de un piso histórico de 70.000 barriles diarios a un volumen actual consolidado de 370.000 barriles por día.

Récord histórico en el campo Petrozamora

Durante su alocución, resaltó de manera enfática el papel protagónico desempeñado por las alianzas estratégicas mixtas, subrayando el desempeño excepcional de una de las empresas binacionales clave en la región. En particular, anunció que el campo Petrozamora rompió récords históricos de producción du-

rante la jornada, un logro técnico que ratifica el compromiso del sector hidrocarburífero con el desarrollo socioeconómico de la nación.

“Veníamos de una producción de 70.000 barriles por día y hoy estamos en 370.000 barriles por día. Hoy, una de las alianzas de la empresa binacional rompió récord de producción, el campo Petrozamora rompió récord de producción, y esa producción va para beneficio de nuestro pueblo y que se pueda traducir en servicios, en remuneraciones, en salud, en

alimentación...", sostuvo la mandataria.

Proyección de 400.000 barriles diarios y salto tecnológico hacia el gas

Mirando hacia el futuro inmediato, la presidenta delineó las metas estratégicas contempladas para el cierre del presente año fiscal y el próximo período anual. En este sentido, proyectó con firmeza que el estado Zulia concluirá el año 2026 alcanzando la cifra de 400.000 barriles diarios de crudo.

Adicionalmente, la presidenta Rodríguez anticipó un hito trascendental para el año 2027: la transformación integral del Zulia en un productor mayoritario de Gas Licuado de Petróleo (GLP). Este avance gasífero no solo suplirá las demandas energéticas internas para el sector residencial, comercial e industrial, garantizando la estabilidad de la vida doméstica del país, sino que también abrirá las puertas para la exportación de moléculas de gas desde Venezuela hacia mercados internacionales, diversificando la matriz exportadora de la nación.

"El estado Zulia este año va a cerrar con 400.000 barriles día de producción y el año próximo, con el incremento de producción que viene, se convertirá en productor de GLP. Imagínense ustedes la importancia. Lo dijimos, vamos a producir gas para garantizar la vida doméstica del país, tanto la vida residencial, la vida industrial, comercial, pero también para exportar moléculas de gas desde Venezuela", afirmó.

Soluciones estructurales para el sistema eléctrico regional

En aras de garantizar un desarrollo armónico, sostenible y equitativo que beneficie directamente a la ciudadanía, la mandataria abordó con franqueza la situación del servicio eléctrico en la entidad zuliana.

Señaló que mantiene un seguimiento exhaustivo, permanente y coordinado junto al gobernador del estado, el ministro del área sectorial y la Vicepresidencia Ejecutiva de la República para solventar las inci-

dencias reportadas.

Como parte de la visión de planificación integral, la presidenta anunció que todos los nuevos convenios petroleros suscritos incorporan de manera obligatoria componentes de autogeneración energética destinados específicamente a los campos de extracción. Esta medida estructural busca liberar de cargas industriales a la red pública, asegurando que la totalidad del excedente en el suministro eléctrico quede plenamente disponible para el beneficio y la tranquilidad de la población zuliana y nacional.

"Tengo que decirles, yo veo extraordinarias perspectivas. Sé que hay un tema eléctrico porque estoy todo el día con el gobernador, con el ministro Alcalá y con el vicepresidente, pero todos estos contratos contemplan la autogeneración para esos campos, para que el resto del servicio eléctrico quede garantizado para la población del estado y del país", enfatizó para concluir.

Claridad estratégica de Tania Díaz en México

Por Irán Aguilera.

En el XXX Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, la intervención de la diputada Tania Díaz no solo resonó por su firmeza, sino por su capacidad para elevar el debate político de la región de Nuestra América por encima de la manipulación mediática. Con claridad conceptual Díaz desarmó las falacias que pretenden deslegitimar al proyecto socialista venezolano, situando su enfoque en la verdadera confrontación irreconciliable, la del proyecto de soberanía continental contra el imperialismo expoliador.

Al retomar el planteamiento de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sobre la vigencia del antagonismo entre la doctrina de Simón Bolívar y la Doctrina Monroe, la parlamentaria presentó con nitidez la esencia ideológica del Proceso Bolivariano de Venezuela, el cual no busca ni ser hegemónico ni dividir, sino alcanzar con mucho esfuerzo la mayor suma de estabilidad política, seguridad social y felicidad para los pueblos, tal como lo soñaba el Libertador. Frente al modelo monroísta —cen-

trado en el dominio, la intervención y el despojo—, el Socialismo Bolivariano del Siglo XXI es una creación heroica, indoamericana y propia, desligada de copias o imposiciones eurocéntricas, que se sustenta en la independencia y la soberanía de los pueblos.

Fue certera Díaz con su llamado a formular preguntas correctas para comprender la agresión militar del 3 de enero contra la Patria: “(...) pero yo pondría una primero: ¿por qué pasó el 3 de enero en Venezuela? ¿Por qué tuvo Estados Unidos que enviar 120 aviones, helicópteros de combate, y un armamento que no había utilizado jamás según palabras de su propio secretario de guerra, y llegar de esa manera a bombardear Caracas, y secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a la diputada Cilia Flores? ¿por qué pasó eso? (...)”. Lejos de las narrativas simplistas, el desproporcionado despliegue bélico imperialista evidenció una realidad insoslayable: Washington tuvo que recurrir a tal fuerza bruta porque era incapaz de doblegar la resistencia del pueblo venezolano a través de bloqueos, asedios econó-

micos o desestabilización interna.

Asimismo, la diputada venezolana denunció con rigor la complicidad de sectores y gobiernos “aliados” que, al ceder ante la gigantesca operación de guerra psicológica sobre las elecciones del 28 de julio de 2024, contribuyeron al cercamiento y criminalización de nuestro liderazgo revolucionario. Las narrativas inducidas buscaron invisibilizar el ejercicio democrático de las bases populares, pero la realidad posterior al 3 de enero demostró dónde reside la auténtica fuerza política de Venezuela: más de 15.000 Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), comunas y movimientos sociales movilizaron a millones de personas en defensa de la soberanía.

Tania Díaz, al hablar como exponente de un pueblo que asume la política con lucidez heroica, en México enarboló por lo más alto la verdad histórica de Venezuela: un proyecto que no se rindió ni se rendirá jamás, porque en sus calles, como diría el comandante Chávez, sigue lloviendo pueblo.

**UNA BATALLA
DE ESPERANZA,
POR EL AMOR
Y LA VIDA.**



19 DE OCTUBRE
DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

SEMANARIO
CUATRO F

La rebelión de los sin techo sacude el corazón de Europa



De la camilla de Maricarmen a las barricadas de París y Milán: la juventud europea despierta frente al saqueo neoliberal

Por MIGS.

El fallecimiento de la octogenaria María del Carmen Abascal tras ser desahuciada en Madrid y la ola de protestas que hoy sacude a España, Francia, Italia y Portugal desnudan el quiebre del pacto social europeo, sacrificado en favor de la especulación inmobiliaria y el rearme militar.

El pasado 7 de octubre falleció en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, a los 87 años, María del Carmen Abascal («Maricarmen»), apenas dos semanas después de haber sido extraída en camilla y rodeada de antidisturbios del piso donde vivió durante 71 años sin dejar de pagar un solo recibo. Su muerte (ocurrida antes de que pudiera ejecutarse un acuerdo tar-

dío para su retorno) ha dejado de ser un drama doméstico para convertirse en el catalizador de una rebelión continental: desde las acampadas indefinidas en la Puerta del Sol de Madrid y la plaza del Rossio en Lisboa, hasta las barricadas e incendios que este fin de semana sacudieron París, Limoges, Milán y Turín, una nueva generación ha tomado las calles de Europa.

Lo que las cancillerías europeas intentan reducir a simples «problemas de orden público» es, en realidad, la quiebra histórica del Estado de Bienestar. La tesis que hoy recorre las plazas del viejo continente es inequívoca: la crisis de la vivienda y la precarización juvenil no son fallos accidentales del mercado, sino el resultado directo de una ofensiva neoliberal que ha entregado los derechos básicos a los fondos de inversión y al gasto militar, mientras los gobiernos liberales y de ultraderecha responden al malestar social con criminalización policial y autoritarismo.

A Maricarmen no la expulsó la morosidad, sino la voracidad de la sociedad inmobiliaria, que exigió incrementar su alquiler de 500 euros en más de un 230 % y rechazó cualquier negociación, incluso cuando terceros ofrecieron costear la diferencia de la renta de por vida. **«Me quieren**

echar por el puto dinero. Esta gente por dinero hace lo que sea», denunció la propia Maricarmen horas antes de que las fuerzas de seguridad ejecutarán su desalojo el 23 de septiembre. Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el operativo confirmó que el aparato estatal actúa hoy como el **«brazo armado del rentismo»**. El caso de Maricarmen encendió la mecha porque retrata sin filtros el destino que aguarda a millones de trabajadores y jóvenes europeos.

De acuerdo con datos recogidos por **Democracy Now!** y organizaciones de inquilinos, los alquileres en España se han disparado un 80 % en la última década frente a salarios estancados, provocando una fractura política que ha obligado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para finales de noviembre. El fenómeno cruzó de inmediato

la frontera ibérica: según reporta RT, en Lisboa cientos de jóvenes acampados en la plaza del Rossio junto a la Confederación General de los Trabajadores Portugueses (CGTP) exigen derogar una ley de arrendamientos que permite subidas interanuales de hasta 200 euros, planteando ya una huelga general coordinada con España y Francia.

En el corazón económico de la eurozona, la imposibilidad de pagar un techo se funde con el desmantelamiento de los servicios públicos y la inflación. Entre el 17 y 18 de octubre, hasta 800.000 personas desbordaron las calles de Francia contra el costo de la vida y el recorte presupuestario de 54.000 millones de euros previsto para 2027, en una jornada que dejó cerca de 2.000 detenidos, 600 agentes heridos y un acumulado de casi 7.000 arrestos —en su mayoría menores de

edad— tras semanas de bloqueos estudiantiles reprimidos con granadas aturdidoras. En simultáneo, las juventudes italianas paralizaron Roma, Milán, Turín, Bolonia y Nápoles durante el llamado **“No Meloni Day”** bajo una consigna que resume el trasfondo geopolítico del conflicto: «Dinero para las escuelas, no para la guerra», denunciando que Bruselas y Roma desfinancian la educación, los salarios y la vivienda pública para sufragar la agenda de rearme de la OTAN.

Lejos de atender las causas estructurales del empobrecimiento, las élites europeas descansan cada vez más en el avance de la extrema derecha para contener la protesta y dividir a la clase trabajadora. Mientras en Alemania el descontento por el precio habitacional y energético es instrumentalizado por formaciones ultras mediante discursos

xenófobos, en Madrid grupos de choque de ultraderecha han intentado asaltar la acampada de la Puerta del Sol. En el plano institucional, la respuesta de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni —quien impulsó decretos para restringir el cupo de estudiantes extranjeros mientras reprimía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos en la plaza del Duomo de Milán—, converge con la advertencia de Emmanuel Macron en París de que los manifestantes «serán perseguidos y castigados», demostrando cómo el neoliberalismo económico y el neofascismo operan como dos caras de una misma moneda represiva.

La Europa que solía dictar cátedra sobre derechos humanos al Sur Global, hoy exhibe sus propias costuras rotas: ancianos desahuciados en ambulancia, jóvenes condenados al hacinamiento o al endeudamiento per-

petuo y gobiernos que blindan los balances de los fondos buitres a punta de porras. La muerte de Maricarmen Abascal demostró que la especulación inmobiliaria mata, pero también dejó un testamento político que hoy resuena más allá de los Pirineos: **«Seguid luchando por lo que es vuestro»**. El camino hacia la huelga general convocada en Italia para el próximo 20 de noviembre —en coincidencia con la jornada de movilización estudiantil europea— y el llamado desde Lisboa y Madrid a articular un paro transnacional marcan un punto de no retorno: o la juventud y la clase trabajadora europea unifican sus luchas para frenar el saqueo neoliberal y el rearme belicista, o el vacío lo ocupará la barbarie de la ultraderecha; por ello, defender hoy cada metro cuadrado de vivienda pública y cada derecho social en las calles es la única trinchera real para conquistar el futuro.

Más del prontuario de la oposición contra el SEN

Por Irán Aguilera.

Resulta ineludible examinar las responsabilidades históricas detrás de las heridas infligidas contra nuestra infraestructura económica. Ha sido una agresión sistemática contra todo el país por muchos años. Particularmente en estos momentos, no puede seguir tratándose con lenidad a los actores políticos que causaron que el pueblo no pueda gozar plenamente, por ahora, del derecho de tener estabilidad en el Servicio Eléctrico Nacional (SEN).

Uno de los tantos ejemplos de esta nefasta política opositora, es la actuación con deliberada maldad registrada entre finales de 2019 y principios de 2020 (no podemos olvidar el apagón). En aquellos años, Venezuela atravesaba una etapa compleja en el sector eléctrico, siendo el estado Zulia una de las regiones más castigadas por racionamientos severos y apagones prolongados que paralizaban la vida diaria y la actividad económica. En respuesta a esta crisis humanitaria, se estructuró una propuesta de financiamiento a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF), concebida

como una solución técnica de emergencia para dar un respiro a los zulianos.

El proyecto contemplaba un crédito por un monto total de 350 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 230 millones se destinarían exclusivamente a estabilizar el sistema eléctrico occidental. No obstante, por mandato constitucional, toda operación de endeudamiento público requiere la autorización de la Asamblea Nacional (AN). En aquel momento, el Parlamento se encontraba bajo el control de la oposición, que convirtió la necesidad técnica vital en arma de confrontación política.

A pesar de que esta iniciativa se consensuó en una mesa de diálogo, la oposición —como ya es costumbre— la enfrentó y bloqueó. Las razones detrás de este veto respondieron a cálculos sumamente mezquinos:

- Obediencia al imperio: Diputados de la entonces AN 2015 priorizaron las presiones y sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
- Discursos cómplices: Un grupo de autodenominados “expertos” eléctricos de la oposición agitaron

falsas denuncias de sobreprecio en los estudios técnicos para justificar echar para atrás el proyecto.

- Sabotaje radical: El obstáculo definitivo provino del sector más extremista y apátrida de la derecha, tanto interna como externa, que temía darle “oxígeno” al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluso cuando el acuerdo garantizaba que los fondos serían administrados por las Naciones Unidas (ONU).

Ese accionar antivenezolano provocó que el proyecto se descartara por completo. Los fondos nunca ingresaron, las plantas térmicas no se rehabilitaron y el Zulia continuó soportando la pesada crisis eléctrica. Diversas figuras de los sectores gremial y empresarial calificaron este rechazo como grave, pues castigó severamente a la ciudadanía.

Como es muy claro, la crisis eléctrica es consecuencia directa del bloqueo y las sanciones, y estas llevan la firma innegable de quienes, desde la trinchera política opositora, apostaron por el sufrimiento del venezolano con tal de alcanzar sus ambiciones de poder.

Choque frontal en Brasil: Lula y el clan Bolsonaro se disputan la presidencia en la segunda vuelta



Por Geraldina Colotti.

Se aplaza a 25 de octubre el último combate político del octogenario Lula, ex sindicalista, presidente del Partido de los Trabajadores (PT) y referente del progresismo regional. En esa fecha, tendrá que medirse en la segunda vuelta con el representante de la extrema derecha brasileña, Flávio Bolsonaro, quien le saca ventaja con 47,14

% de los votos frente a 45,3 % del presidente saliente en la competición electoral celebrada el domingo; una diferencia entre ambos de aproximadamente dos millones y medio de votos. Los demás candidatos menores, excluidos del balotaje y todos de centroderecha, alcanzaron en conjunto alrededor del 12 %, cifras que resultarán determinantes para las alianzas de

la extrema derecha de cara a la segunda vuelta. Los votos nulos representaron el 2,93 % y los blancos el 1,84 %.

La participación electoral fue de 79 %, en línea con los comicios anteriores. En Brasil, el voto es obligatorio, aunque la sanción económica directa es prácticamente simbólica, situándose habitualmente en torno a los 3,51 reales por tur-

no electoral (menos de un euro). Sin embargo, más allá del coste de la multa, el verdadero castigo consiste en las restricciones burocráticas y civiles que se activan para quienes no regularicen su situación con la justicia electoral. Quien se salte el voto (y no presente justificación ni pague la multa) enfrentará bloqueos severos, entre ellos la imposibilidad de obtener o renovar el pasaporte o el documento de identidad en determinados trámites, la prohibición de presentarse a oposiciones públicas o asumir cargos estatales, así como trabas para matricularse en universidades públicas o para obtener créditos y financiación en la banca estatal.

Victoria dinástica para el clan Bolsonaro. Además de Flávio, hijo del ex presidente golpista Jair —quien cumple una condena de 27 años y tres meses de cárcel por intentar subvertir las instituciones a finales de 2022—, otros cuatro miembros de la familia triunfa-

ron en las elecciones legislativas: Michelle, esposa del ex presidente; Carlos, hijo de Jair (hermano de Flávio); Jair Renan, hijo menor de Jair; y Renato Bolsonaro, hermano de Jair (es decir, tío de Flávio).

Michelle Bolsonaro se aseguró un escaño en el Senado en representación del Distrito Federal de Brasilia con el 29 % de los votos. También al Senado fue electo Carlos Bolsonaro, quien ganó con el 25 % de los votos en el estado de Santa Catarina, uno de los grandes bastiones del bolsonarismo. Asimismo, resultó electo Renato Bolsonaro, quien obtuvo un escaño como diputado por São Paulo, mientras que Jair Renan, concejal municipal en Balneário Camboriú desde 2024, representará a Santa Catarina, también en la Cámara de Diputados.

No corrieron la misma suerte Rogéria Bolsonaro, ex esposa de Jair y madre de Flávio, que se había postulado para la Cámara

de Diputados por el estado de Río de Janeiro, ni Marcelo, primo de Jair, candidato a la asamblea de Río. Valéria, esposa de un primo segundo, candidata a la misma asamblea, deberá aguardar al cálculo de los restos electorales para saber si resulta o no elegida.

Flávio Bolsonaro arrasó en las mesas electorales instaladas en “Israel”, cosechando en torno al 74 % de los votos. Esta tendencia de profundo arraigo de la derecha sionista y de la diáspora presente en el Estado hebreo a favor del bolsonarismo no constituye una novedad: ya en las presidenciales de 2022 Jair Bolsonaro se había impuesto claramente en “Israel” (alrededor del 46 % de los votos válidos), reflejando la estrecha sintonía política entre el gobierno sionista de aquel periodo y la línea ultraconservadora, atlantista y proisraelí de la derecha brasileña (simbolizada también por el uso frecuente de la bandera de Israel en las concentraciones

bolsonaristas).

El dato contrasta de forma especular con otras plazas de la diáspora en el exterior —como ocurrió, por ejemplo, en Ramala, en Palestina, donde por el contrario Lula y las fuerzas progresistas obtienen históricamente porcentajes búlgaros (superiores al 90 %)—. También en esta ocasión, Lula se impuso con el 93,09 % de los sufragios, mientras que Bolsonaro obtuvo el 3,97 %, sobre un total de 2.135 electores habilitados de los cuales 1.202 acudieron a las urnas.

Tendencias similares se reflejaron en otros puntos: por ejemplo, el candidato del PT alcanzó el 65,7 % en las mesas instaladas en Pekín, Shanghái y Cantón, mientras que Flávio Bolsonaro sumó el 24,0 %. Lula también se impuso en Oceanía, logrando 234 votos frente a los 64 del candidato del Partido Liberal (PL) en Nueva Zelanda.

El 4 de octubre, ade-

más de la presidencia de la República, la ciudadanía fue convocada a renovar una porción masiva del poder legislativo federal y estatal. Mediante el sistema de votación electrónica, se sufragó para elegir a los gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados federados y del Distrito Federal de Brasilia (con previsión de segunda vuelta), así como para renovar los escaños del Senado federal (compuesto por 81 miembros y renovado por fracciones en ciclos alternados) y la totalidad de la Cámara de Diputados (513 escaños), junto con las diputaciones estatales y distritales.

Un entramado que convirtió la cita electoral en un auténtico test de fuerza ramificado en todo el subcontinente, donde los equilibrios de poder entre las fuerzas progresistas (como el PT) y la oposición de derecha se disputan con dureza también a escala de los estados federados y en la composición del Congreso.

Tras este primer turno, el Partido Liberal (PL), principal fuerza del bloque bolsonarista, se perfila como protagonista en el renovado Senado brasileño. La formación encabeza el recuento en 20 de los 54 escaños en juego, por delante del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), con siete, y del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con seis. Estos resultados deberán sumarse a los de los 27 senadores elegidos en 2022 cuyo mandato se extiende hasta 2031.

Entre estos últimos, ocho pertenecen al PL, cinco a União Brasil, cuatro al PT, tres al Partido Progresista (PP), dos a cada uno el Partido Socialdemócrata (PSD) y los Republicanos, completados por un senador del Partido Socialista Brasileño (PSB), uno del MDB y uno del Partido Social Cristiano (PSC). Con 28 senadores, el Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro se consolidaría como el grupo más numeroso de la

Cámara alta.

Este nuevo equilibrio parlamentario resultará determinante para la correlación de fuerzas entre el gobierno y la oposición en la próxima legislatura, blindando la posición del bloque conservador en las batallas políticas e institucionales, incluidas aquellas relativas a las peticiones de destitución (impeachment) contra los jueces de la Corte Suprema, salpicados por escándalos de corrupción.

Frente al arrogante machismo de la extrema derecha y a la contundente ofensiva del clan Bolsonaro, existe otra parte sustancial de la sociedad brasileña que se opone de raíz a este proyecto de regresión civil y social. En las urnas, esta resistencia ha adoptado rostros definidos, enraizados en los movimientos territoriales, en el feminismo interseccional y en la lucha por los derechos LGBTQI+.

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) eligió a

ocho representantes para el poder legislativo en estos comicios, incluidos cuatro diputados federales y cuatro diputados estatales, todos bajo las siglas del PT en diferentes regiones del país. Para la Cámara de Diputados fueron elegidos Valmir Assunção (BA), Rosa Amorim (PE), Marcon (RS) y João Daniel (SE), todos con una sólida trayectoria de activismo y defensa de la reforma agraria. Rosa Amorim, en particular, quien ya ejerció como diputada estatal en Pernambuco, se convierte en la primera mujer sem terra en acceder a la Cámara de Diputados. Nacida en el asentamiento de Normandía, en Caruaru, inició su militancia desde la infancia y fue dirigente del Levante Popular da Juventude y directora cultural de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

En las asambleas legislativas estatales, el MST reeligió a Adão Pretto Filho (RS), Marina do MST (RJ) y Missias (CE), al tiempo que Camilo Daniel (SE)

ocupará por primera vez un escaño en la Asamblea Legislativa de Sergipe.

En el plano de los derechos civiles y de la representación arcoíris y feminista, las urnas arrojaron resultados históricos acompañados de señales de profunda tensión democrática. En São Paulo, Erika Hilton (PSOL) fue reelegida con cerca de 1,6 millones de votos, convirtiéndose en la mujer más votada en la historia de la Cámara de Representantes y batiendo cualquier récord nacional previo. En un discurso posterior a conocerse los resultados, Hilton subrayó la trascendencia histórica de su elección para las personas transgénero y travestis, recordando que Brasil sigue siendo trágicamente el país del mundo que más asesina a mujeres como ellas, y definió el triunfo como una conquista colectiva.

La diputada se vio obligada, no obstante, a denunciar una grave amenaza de muerte re-

cibida por correo electrónico en la misma mañana de la votación, acompañada de insultos transfóbicos y datos sobre su domicilio particular, un episodio que calificó como una nueva provocación de quienes no soportan su éxito. Hilton celebró asimismo la elección de Sofia Favero para la Asamblea Legislativa de São Paulo (Alesp), una candidatura impulsada por ella misma y construida al margen de las mafias políticas tradicionales.

También en primera línea, el diputado distrital Fábio Félix (PSOL) dio el salto a la Cámara de Diputados erigiéndose como el candidato a diputado federal más votado del Distrito Federal con nada menos que 223.000 votos (casi el doble que el segundo clasificado). Trabajador social, profesor y primer hombre abiertamente gay elegido en la cámara legislativa de la capital, Félix ha presidido la Comisión de Derechos Humanos y se ha destacado como ponente en la comisión de in-

vestigación sobre el feminicidio y en la CPI sobre los actos golpistas del 8 de enero, exigiendo el castigo de los colaboradores de Bolsonaro implicados en la intentona golpista. Félix se ha sumado asimismo al nuevo Grupo de la Izquierda Radical, constituido para coordinar las luchas sociales y parlamentarias contra la carestía de la vida y para blindar por ley los derechos civiles conquistados en el Tribunal Supremo Federal.

Pese a la movilización de estas importantes vanguardias sociales, el voto ha puesto de relieve los límites estructurales de las políticas aplicadas hasta la fecha por el tercer mandato de Lula. Gran parte del malestar popular y de la resistencia de la derecha radical precisamente en las reformas estructurales postergadas por el Ejecutivo, que no ha logrado socavar las desigualdades sistémicas ni atajar el coste de la vida, lastrado por la percepción negativa sobre el poder adquisi-

tivo y por la zozobra en materia de seguridad ciudadana.

Para recuperar el terreno perdido y desactivar la narrativa reaccionaria —apuntan los representantes de las fuerzas alternativas—, el progresismo brasileño no puede contentarse con la mera defensa de lo existente, sino que debe colocar en el centro una agenda de profundas transformaciones estructurales. Entre las urgencias inaplazables figuran la reducción de la jornada laboral —una batalla clave para aliviar a la clase trabajadora—, el control estricto de los precios de los bienes básicos y de alquileres, y un fortalecimiento radical de los servicios públicos esenciales como el Sistema Único de Saúde (SUS) y la educación de tiempo completo, arrebatando espacio a la hegemonía económica y cultural de las derechas.

En su primera intervención tras conocerse los resultados, Lula afirmó que la campaña entra en una nueva fase y

defendió la continuidad de su proyecto. Reconoció que le habría gustado vencer en primera vuelta, pero reivindicó el balance de su gestión y censuró con dureza el pasado familiar de su oponente, flagrantemente salpicado de escándalos morales y financieros. «La segunda vuelta es el momento de mostrar la verdadera imagen del Brasil actual y del Brasil que deseamos», aseveró Lula, argumentando que la confrontación a dos permitirá clarificar las diferencias sustanciales entre los modelos de país.

El presidente saliente recalcó que la campaña pondrá el acento en la continuidad de las inversiones en educación, ciencia, tecnología y desarrollo industrial, abogando por ampliar la escolarización de jornada completa, consolidar las universidades e institutos federales y potenciar la capacidad productiva nacional.

«Seguiremos invirtiendo en la universidad,

en tecnología y en dependencia de los institutos federales», declaró, enumerando como prioridades la explotación de las tierras raras y los minerales críticos, los nuevos hallazgos petroleros de Petrobras y el fortalecimiento del tejido industrial brasileño. Asimismo, reclamó mayores inversiones en sanidad pública para recortar la dependencia exterior y fomentar la producción nacional de medicamentos esenciales.

En el plano social, el candidato del Partido de los Trabajadores se comprometió a fortalecer el Sistema Único de Saúde (SUS), el programa de Farmacias Populares y las políticas de inclusión. En el terreno económico, defendió la responsabilidad fiscal, matizando que el equilibrio de las cuentas públicas no puede sostenerse a costa de las condiciones de vida de las mayorías sociales.

El presidente también lamentó los pobres resultados del bloque progresista en São

Paulo, donde figuras como Simone Tebet, Marina Silva y Fernando Haddad no lograron escaños senatoriales ni gobernaciones, concluyendo que «es el Estado el que sale perdiendo», antes de cerrar su intervención con una proclama de confianza: «Vamos a ganar estas elecciones».

La polarización que enfrenta a Lula con el clan Bolsonaro excede con creces las fronteras internas de Brasil: dibuja dos proyectos antagónicos e irreconciliables que repercuten con extrema crudeza en todo el subconjunto latinoamericano y en el tablero geopolítico global, empezando por su vínculo subordinante con los Estados Unidos de Donald Trump.

Como advierte el filósofo Vladimir Safatle en Brasil de Fato, el país afronta «una labor política colosal» que hipotecará su fisonomía durante la próxima década o quince años. Si la derecha radical de matriz bolsonarista se impone, no asistire-

mos a una alternancia gubernamental ordinaria de cuatro años, sino a un salto cualitativo del fascismo continental que —al calor del impulso global infligido por el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca— operará con una capacidad destructiva infinitamente mayor y con plena conciencia de sus blancos, habiendo desmantelado ya los diques de contención institucionales que en el pasado atenuaron las veleidades golpistas.

La victoria de Flávio Bolsonaro constituiría una pieza maestra para la geopolítica de Washington en América Latina. Desde el retorno de Trump a la presidencia, ninguna fuerza de izquierda ha ganado comicios presidenciales en la región. Washington aspira a encontrar en Brasil el ariete definitivo para imponer su Doctrina Monroe, cercar la influencia de China y dinamitar los proyectos de soberanía e integración regional multilateral, poniendo en entredicho la propia cohesión de los BRICS,

que un gobierno bolsonarista amenazaría con fracturar o sabotaje interno, consumando su salida de una alianza de la que es miembro fundador.

Frente a esta tenaza imperial, la izquierda democrática y radical internacional contempla el proceso brasileño como una batalla campal. Como evidencian las recientes irrupciones de las izquierdas alternativas en los centros urbanos globales —desde las luchas por la congelación de los alquileres lideradas por Zohran Mamdani en Nueva York hasta los avances de Die Linke en Berlín—, la única salida para frenar a la extrema derecha no reside en la moderación subalterna, sino en la capacidad de ocupar el espacio político «llamando a las cosas por su nombre», arraigándose en las necesidades materiales de las clases subalternas y contraponiendo un programa de radical justicia social al populismo autoritario y regresivo del bolsonarismo.

Una lección histórica que resuena con amargura más allá de los Andes: el derrumbe del derecho internacional, el peligro constante de agresiones militares (como en Venezuela) y de nuevos golpes de Estado blandos en la región muestran que la derecha clásica ha cedido el testigo, definitivamente a escala global, a la extrema derecha.

Hemos transitado hacia una falsa alternativa entre una derecha moderada y una extrema derecha fascistizada, en la que la socialdemocracia y el progresismo liberal, incapaces de asumir la audacia de un cambio estructural, corren el riesgo histórico de desaparecer. Prisioneros de alianzas mefíticas con un centro político que hace tiempo asumió los dogmas de la derecha y del complejo militar-industrial —tal como ocurre en Italia y en el conjunto de Europa—, el reformismo sin brújula socialista se encamina a su propia y previsible liquidación política.

